

dos

Elementos de contexto

igualdad de oportunidades • cultura gitana • solidaridad • defensa de los derechos • respeto • des

capacidad de interlocución • actividad internacional • calidad de servicios • solidaridad • compro

influencia social • tolerancia • diversidad cultural • financiación diversa y estable • acompañamie





El nuevo Plan estratégico de la FSG para el periodo 2009-2013 aparece en un momento en el que han cambiado muchos elementos del contexto político, social y económico en el que desarrollamos nuestras actividades. Los siguientes apartados de esta sección resumen algunos de los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta durante el desarrollo de nuestras actividades a corto y medio plazo.

Las comunidades gitanas en España y en Europa

En los últimos años se han operado cambios de especial y profunda significación para las comunidades gitanas en España y en Europa. En general, se aprecia una mayor atención y sensibilidad de los poderes públicos hacia la cuestión gitana en un doble sentido: por un lado en cuanto al reconocimiento formal de la cultura y el pueblo gitano; por otro, un mayor compromiso con la inclusión social alimentado, quizá, por unas mayores expectativas de éxito de la inversión en programas sociales. Existen, en efecto, evidencias de una tendencia sostenida de mejora de la situación de los gitanos y gitanas en España en cuanto a la mayor permanencia en el sistema educativo de la juventud, las condiciones de vivienda, o su acceso a la formación profesional y al empleo. Hay un cambio de mentalidad en muchas personas gitanas, así como en gran parte de la población mayoritaria. En los últimos años han aparecido en España nuevos órganos formales de participación tanto a nivel estatal, con la puesta en marcha del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, como en varias comunidades autónomas y en algunos grandes municipios. Un mayor reconocimiento formal de la identidad del pueblo gitano quedó plasmado en una moción aprobada por el Congreso de los Diputados en 2005, así como



en las reformas de algunos estatutos de autonomía. Por último, la creación del Instituto de Cultura Gitana constituyó un hito histórico innegable al reconocerse la dimensión cultural de las personas gitanas españolas en el seno del Ministerio de Cultura.

La manera en que se han ido construyendo las prácticas a la hora de abordar la cuestión gitana en España (sería inadecuado hablar aún de modelo) se ha convertido en un referente de inspiración en el exterior. Es evidente que, desde dentro, somos conscientes de los enormes déficits y de las situaciones de exclusión social extrema de las que muchas familias gitanas son aún cautivas. Pero, sin duda, algunos elementos de estas prácticas que se han venido consolidando en los últimos años se pueden considerar como aciertos o, por lo menos, como respuestas razonables, sobre todo si son comparadas con la desorientación y el desánimo que cunde en otros países. Entre estas respuestas acertadas debemos destacar el desarrollo de medidas específicas para la inclusión social de la población gitana enmarcadas en las políticas generales, así como la evolución paralela de órganos de representación, a los que ya se ha hecho referencia anteriormente. La utilización de los Fondos Estructurales de la Unión Europea para la inclusión social de la población gitana ha tenido resultados cuantitativos y cualitativos por encima de las expectativas que teníamos hace unos pocos años. La adopción de instrumentos legales y prácticas eficaces para la lucha contra la discriminación es otro campo en el que se han producido significativos avances, aunque probablemente el camino que queda por recorrer es mucho más largo que el ya recorrido.

No cabe duda de que la imagen social de las personas gitanas sigue siendo un obstáculo de primer orden para alcanzar un horizonte de normalización. En los últimos años hemos asistido a importantes avances, pero también a fenómenos que obstaculizan estos progresos. Se han desarrollado campañas y acciones de sensibilización sin precedentes, los medios de comunicación audiovisual y la prensa escrita han retratado perfiles de gitanas y gitanos que proyectan una imagen positiva ajustada a la realidad; sin embargo,





el goteo de acciones delictivas y conflictos en los que la condición étnica de los protagonistas era subrayada, así como la emisión de reportajes de televisión que retratan los aspectos más oscuros de la marginalidad en horarios de máxima audiencia, tienen efectos perversos en las conciencias de una parte de la población poco inclinada al análisis de la complejidad social.

Otro fenómeno relativamente reciente y de gran relevancia es la entrada en nuestro país de miles de roma/gitanos procedentes de los países de Europa Central y Oriental, sobre todo de Rumania y en menor medida de Bulgaria, países que se incorporaron a la Unión Europea en enero de 2007 y cuya ciudadanía puede, por tanto, moverse y establecerse con libertad en cualquier país de la Unión. Algunos de estos roma/gitanos han contribuido a dar visibilidad en España a situaciones de extrema marginalidad que alimentan los estereotipos y prejuicios hacia «lo gitano» en general. La presencia de roma/gitanos extranjeros en nuestro país es, en todo caso, parte de un fenómeno más amplio que ha situado esta cuestión entre las prioridades de las instituciones europeas. Los roma/gitanos son hoy la principal minoría étnica de la Unión Europea tras la adhesión de países que contaban, entre todos, con varios millones de roma/gitanos entre sus poblaciones. Las condiciones de vida de los roma/gitanos en estos países son muy precarias y muchos deciden buscar nuevas oportunidades en el extranjero. La Unión Europea se ha visto obligada a actuar tanto por la necesidad de elevar los estándares de protección dentro del seno de la Unión, como por las dificultades que las migraciones de roma/gitanos han planteado o han encontrado en países de destino, como hemos visto recientemente en Italia.



En septiembre de 2008 se celebró en Bruselas la primera cumbre europea sobre roma/gitanos con la intención de ser el punto de partida para la construcción de un marco de actuación más consistente a nivel europeo. Así pues, es importante tener en cuenta que el actual escenario probablemente favorecerá un mayor dinamismo político a favor de los roma/gitanos, la innovación en el diseño de programas y medidas, y el intercambio de conocimiento y experiencias. La presidencia española del Consejo Europeo en el año 2010 puede y debe ser una oportunidad para fortalecer esta tendencia.

En conclusión, aunque muchos elementos del escenario han progresado durante los últimos años, lo que sin duda es un motivo de satisfacción, los propios avances, por insuficientes, determinan la posición de las metas que aún debemos perseguir.

Contexto socioeconómico

Desde que arrancó el proceso de elaboración de este Plan Estratégico hasta el momento en que su aprobación por nuestro Patronato lo convierte en efectivo, las sensaciones sobre el comportamiento de la economía han pasado de ser moderadamente preocupantes a convertirse en uno de los principales motivos de alarma en todo el planeta. La situación actual y las perspectivas a corto plazo con respecto a algunos de los principales indicadores socioeconómicos son especialmente graves en España, y afectan en gran medida a los ámbitos en los que operan los programas para la inclusión social de colectivos desfavorecidos.

Durante los años que cubrió nuestro anterior plan el crecimiento económico de España estaba por encima de la media europea, la tasa de ocupación crecía y el desempleo descendía de forma sostenida, por lo que el número de cotizantes a la Seguridad





Social alcanzó máximos históricos y las cuentas del Estado llegaron a presentar un superávit desconocido. Sin embargo en la actualidad el panorama se presenta con perspectivas muy diferentes, al menos en el corto plazo. La fuerte creación de empleo de la etapa anterior tuvo un impacto decisivo en las oportunidades de inserción laboral de personas en situación de desventaja. Muchas de estas personas accedieron al mercado de trabajo con el apoyo de actividades de cualificación profesional, servicios de orientación, etc., pero también gracias a un contexto en el que aumentaba la oferta de empleos en sectores intensivos en mano de obra. El cambio de tendencia hacia la destrucción de puestos de trabajo, que todos los análisis coinciden en que se mantendrá durante un periodo considerable, afectará sin duda a las oportunidades de mantenerse o de entrar en el mercado de trabajo de colectivos con especiales dificultades.

Uno de los colectivos que se verá más gravemente afectado en España es el de las minorías étnicas, formado principalmente por la población inmigrada durante los años de expansión económica. La llegada de varios millones de personas extranjeras ha conformado nuevas realidades de convivencia interétnica entre distintas minorías, incluyendo a la población gitana autóctona o a los roma/gitanos de otros países. En algunas ocasiones esta convivencia se produce en contextos de segregación espacial y marginalidad. El empeoramiento de las oportunidades de acceso a ingresos y recursos se traduce en un mayor riesgo de que la convivencia se deteriore y surjan conflictos entre comunidades étnicas, como los medios de comunicación han reflejado en varias ocasiones durante la segunda mitad de 2008. En este contexto, tanto los poderes



públicos como las organizaciones sociales nos enfrentamos hoy al reto de encontrar fórmulas de intervención eficaz y de gestión de la diversidad.

En un escenario de incertidumbre económica en el que, en cualquiera de los casos, se avecina un cambio de ciclo, las políticas de gasto público recuperan protagonismo para activar los sectores económicos más afectados, pero también para encontrar soluciones duraderas a las debilidades estructurales del entorno productivo español y a los déficits de cualificación profesional de parte de la fuerza productiva. Las estrategias en cuanto a cómo utilizar la inversión pública aún están en fase de definición, pero su orientación a unos fines u otros determinará en buena medida el contexto en el que las organizaciones del tercer sector de acción social deberán posicionarse para cumplir con su misión.

Situación del tercer sector

El tercer sector y, en particular, el tercer sector de acción social, ha operado un fuerte desarrollo en los últimos años. El aumento del volumen de actividad de las entidades no lucrativas es evidente, como es también evidente y significativo su creciente peso en la economía y en la generación de empleo. El dinamismo del sector se manifiesta tanto en el número de entidades como en el desarrollo y la consolidación de organizaciones de gran tamaño con alto nivel de profesionalización.

Otra tendencia observable es la diferenciación dentro del propio sector entre organizaciones que se dedican principalmente a la defensa de derechos, la promoción de la participación, la sensibilización, etc., y las organizaciones que se decantan por la prestación de servicios especializados para determinados colectivos, habitualmente



con el patrocinio de los poderes públicos. La armonización de estos dos frentes de actividad no es siempre fácil para las organizaciones que pretenden afrontar ambos desafíos.

En este contexto, las grandes ONG de acción social se enfrentan a los retos principales de cualificar a sus profesionales, de asegurar la calidad en la gestión y en la prestación de servicios, así como de hacer llegar su mensaje con mayor claridad a la ciudadanía. La visibilidad y las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas son hoy más importantes que nunca en un momento en que la legitimidad democrática de las organizaciones sociales debe de ser puesta en valor frente la creciente competencia del sector lucrativo en la provisión de muchos servicios en el área social. Asimismo, esa legitimidad democrática precisa reforzarse promoviendo una mayor conexión de la organización formal con su base social.

También es necesario ir más allá en la articulación de mecanismos de cooperación que generen sinergias efectivas entre distintas organizaciones, así como demostrar capacidad para tener una interlocución solvente en el debate de las grandes políticas públicas.

Las relaciones con las instituciones financiadoras, ya sean administraciones públicas o entidades privadas, que dedican cada vez mayores recursos a la inversión social, son un campo delicado en el que las viejas prácticas ya no son la manera más eficaz de afrontar el futuro. Las exigencias de calidad, eficacia demostrable y transparencia cobran en esta relación una enorme importancia, ya que un donante





privado difícilmente destinará sus recursos a una organización que no pueda garantizar resultados visibles. Por otro lado también se presenta la oportunidad de tener relaciones más estables en el tiempo orientadas al logro y no tanto al cumplimiento de formalidades burocráticas.

Por último, la participación del tercer sector en la formulación y ejecución de políticas europeas es cada vez más relevante. Todo lo dicho para el ámbito nacional cobra también sentido en el ámbito transnacional, algo especialmente significativo para la FSG teniendo en cuenta la emergencia de la cuestión roma/gitana a escala europea ya apuntada en un apartado anterior. La capacitación técnica para participar en el diseño de los enfoques políticos es un reto para el posicionamiento estratégico de entidades con la vocación de participar en la gobernanza europea.